

LEGAJO DE APELACIÓN EN CAUSA N° CCC 43275/2017, CARATULADA: “B., R. R. Y OTRO INFRACCIÓN LEY 24.769”, JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N° 10, SECRETARÍA N° 20, EXPEDIENTE N° CCC 43275/2017/3/CA1, ORDEN N° 30.581, SALA “B”.

Buenos Aires, de julio de 2022.

VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos por la defensa oficial de R. R. B. y de J. H. F. A. contra la resolución de fecha 24/08/2021, en cuanto por aquélla el juzgado “a quo” dictó el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, de los nombrados y dispuso trabar un embargo sobre los bienes de cada uno de aquéllos hasta cubrir la suma de doscientos mil pesos (\$ 200.000).

Los memoriales presentados con fecha 18/10/2021, por los cuales la defensa oficial de los nombrados informó en los términos previstos por el art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, por la resolución apelada, el señor juez que se encontraba a cargo del juzgado “a quo” resolvió dictar el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, de R. R. B. y de J. H. F. A. por considerarlos, “*prima facie*”, coautores del delito de insolvencia fiscal fraudulenta previsto por el art. 10 de la ley N° 24.769, con relación al hecho por el cual fueron indagados, consistente en “...haber provocado o agravado la insolvencia de U. F. S., quien los días 17 de abril y 11 de julio de 2017, respectivamente, atribuyó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos la titularidad de la explotación de los locales comerciales que ostentaba, sitos en Adolfo Alsina N° 1501, Avenida San Juan N° 2102 y Avenida Directorio N° 3999, todos ellos de esta ciudad, a los nombrados B. y F. A., con el conocimiento de la iniciación y existencia de un procedimiento ante la Justicia Federal de la Seguridad Social tendiente al cobro de obligaciones de aportes y contribuciones destinados al régimen de la Seguridad Social para impedir que la justicia pudiera hacer efectiva la ejecución entablada contra el nombrado F. S. reteniendo el 20 % de los ingresos brutos semanales del local ubicado en Avenida San Juan N° 2102 de esta ciudad hasta cubrir la suma de \$ 287.600,53, con más del 30 % del



mencionado monto presupuestado para responder a intereses, costos y costas; generando un aparente desplazamiento patrimonial con la finalidad de ocultar la titularidad sobre los establecimientos comerciales antes mencionados, siendo que F. S. continuaba disponiendo y beneficiándose de la facturación e ingresos de tales negocios...”.

Por otra parte, por la resolución recurrida se dispuso trabar un embargo sobre los bienes de Rodrigo Rubén BORJAS y de J. H. F. A. hasta cubrir la suma de doscientos mil pesos (\$ 200.000), respecto de cada uno de aquéllos.

Cabe señalar que, con fecha 23/12/2020, el juzgado “*a quo*” declaró la extinción de la acción penal por muerte de U. F. S. y, en consecuencia, dispuso un sobreseimiento respecto del nombrado, pronunciamiento que se encuentra firme.

2º) Que, en sustento de la decisión recurrida, el tribunal de la instancia anterior expresó que “...[a] pesar de lo manifestado por el nombrado Borjas en su declaración indagatoria, no hay dudas que, tal como lo expresara el propio F. A. en el escrito presentado al momento de prestar declaración indagatoria, el dueño de las explotaciones comerciales antes reseñadas [en referencia a los locales comerciales ubicados en Av. San Juan N° 2102, Adolfo Alsina N° 1501 y Av. Directorio N° 3999, todos de esta ciudad] era U. F. S. (y no su hijo M. D. F.)...”, quien “...tenía conocimiento de la iniciación de un procedimiento de cobro, cuanto menos desde la fecha de notificación de la ejecución fiscal, es decir desde el 11/10/2016 y, frente a esa circunstancia, generó el desplazamiento de su patrimonio hacia Borjas primero (17/4/2017) hasta el comienzo de sus desavenencias con aquél y luego hacia F. A. (11/7/2017) con el objetivo de provocar o agravar la insolvencia y frustrar maliciosamente el cobro de las obligaciones al Sistema Único de la Seguridad Social que adeudaba...”.

En ese sentido, a partir de la valoración de los elementos probatorios incorporados durante la pesquisa, el señor juez “*a quo*” ponderó que “...B. y F. A. fueron indispensables como sujetos activos [del delito de insolvencia fiscal fraudulenta atribuido], quienes con su accionar simulaban ser los titulares de los locales comerciales que le permitieron a U. F. S. sortear el pago de sus obligaciones de aportes y contribuciones al sistema de la seguridad



social...”, y concluyó que los nombrados habrían actuado con el conocimiento y la voluntad de realización de los elementos típicos de la figura contemplada por el art. 10 de la ley 24.769, “...a resultas de lo cual su decisión de recibir la titularidad de los establecimientos comerciales que permitieron provocar o agravar la insolvencia de U. F. S. y evitar el cobro de la deuda en concepto de aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social que aquél tenía con la Obra Social del Personal de Panaderías habría sido, prima facie, dolosa...”.

3º) Que, por los recursos de apelación interpuestos y por los memoriales presentados en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N., la defensa oficial de R. R. B. y de J. H. F. A. no se agravió por la estimación de la acreditación de la materialidad del hecho ilícito imputado a los nombrados efectuada por la resolución recurrida, sino que cuestionó únicamente la participación que se les atribuye a aquéllos en el suceso investigado.

Al respecto, la parte recurrente transcribió parte de los descargos de los imputados en la oportunidad de prestar la declaración indagatoria y formuló manifestaciones relacionadas con la ausencia de dolo en el comportamiento de sus defendidos que resultan idénticas en todos sus términos, algunas de las cuales se relacionan con cuestiones que no tendrían vinculación con el suceso investigado y atribuido a los nombrados.

En el sentido indicado, se argumentó que por la resolución apelada el juzgado “*a quo*” restó sentido y significancia de manera arbitraria a las manifestaciones de R. R. B. y de J. H. F. A. “...*cuando de autos no surgen elementos de prueba en contrario que pueda contrarrestar los dichos de [aquéllos]...*”, que la imputación que se les dirigió resulta completamente forzada y poco clara, que no se indicaron hechos concretos en los cuales se habrían visto involucrados ni acciones concretas relacionadas de manera coherente con el delito tributario cuya presunta comisión se atribuye y que “...*se debe probar la voluntad de mi[s] defendido[s] de haber querido participar de la empresa para al menos colaborar con la maniobra delictiva que V.S. viene investigando en autos...*”. En virtud de lo expresado, la defensa oficial de los nombrados concluyó que la resolución recurrida no resulta razonable, ni fundada suficientemente en hechos y derecho, por lo que resulta arbitraria.



4º) Que, en primer lugar, corresponde examinar el agravio invocado tendiente a descalificar el auto de procesamiento dictado respecto de los imputados como acto jurisdiccional válido, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad y/o en la inobservancia supuesta de lo establecido por el art. 123 del C.P.P.N.

En este sentido, corresponde expresar, en primer lugar, que según ha establecido este Tribunal en oportunidades numerosas, el postulado rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos. La interpretación de la existencia de aquéllas es restrictiva (confr. art. 2 del C.P.P.N.) y solo procede la declaración cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte que las invoca, y no cuando se plantean en el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial (confr. Regs. Nos. 367/00, 671/00, 682/00, 1170/00, 533/07, 602/15 y 72/16, y CPE 1042/2018/8/CA3, res. del 18/02/21, Reg. Interno N° 42/21, entre muchos otros, de esta Sala “B”).

5º) Que, asimismo, este Tribunal ha establecido con anterioridad que, sin perjuicio de la exigencia genérica de fundamentación de los autos que se dispone por el art. 123 del C.P.P.N., por el art. 308 del mismo cuerpo legal se establecen, específicamente, las formas que deben observarse para la validez de un auto de procesamiento (confr. Regs. Nos. 379/11, 63/12 y 712/13, CPE 61011858/2009/3/CA1, res. del 13/07/18, Reg. Interno N° 572/18, y CPE 480/2018/3/CA1, res. del 29/06/21, Reg. Interno N° 429/21, entre muchos otros, de esta Sala “B”).

Por lo tanto, es útil poner de relieve que, por el pronunciamiento cuestionado, se consignaron los datos personales de los imputados, se realizó una mención de lo manifestado por aquéllos al prestar la declaración indagatoria, se expresaron los motivos por los cuales se dictó la decisión impugnada, se efectuó una descripción del hecho investigado y de la intervención que R. R. B. y J. H. F. A. habrían tenido en aquéllos, se indicó la calificación legal “*prima facie*” atribuible al suceso que se les imputó, con cita de las disposiciones legales que se consideraron aplicables, y se analizó el grado de participación atribuible a los nombrados. En consecuencia, corresponde establecer que en el caso se observaron las previsiones del art. 308 del C.P.P.N.



6º) Que, para que la nulidad de una resolución se produzca por causa de vicios de fundamentación, aquella debe mostrar omisiones sustanciales de motivación, o resultar autocontradictoria, o arbitraria por apartamiento de las reglas de la sana crítica, de la lógica, de la experiencia o del sentido común, o estar basada en apreciaciones meramente dogmáticas. Ninguno de aquellos defectos se advierte en la resolución recurrida, que ofrece una motivación suficiente de lo decidido, independientemente de la coincidencia, o no, que se puede tener con aquellas conclusiones.

7º) Que, por lo tanto, se advierte que la arbitrariedad y la carencia de una motivación adecuada, aludidas por la defensa oficial de los imputados, sólo constituye una discrepancia de aquella parte con los criterios vinculados con la cuestión de fondo debatida en los autos principales y con las conclusiones a las cuales se arribó por la resolución apelada, sin que por aquella circunstancia se encuentre mérito suficiente para declarar la invalidez del auto de procesamiento examinado por la presente.

8º) Que, las diferencias de criterio que tengan las partes con relación a la fuerza o al alcance probatorio de los elementos incorporados a la causa y a la idoneidad de éstos para generar la convicción suficiente que se exige para el dictado del auto de procesamiento (art. 306 del C.P.P.N.) son materia de la discusión central del trámite del recurso de apelación, pero no implican la invalidez de la resolución recurrida, en los casos -como el que se presenta en el “*sub lite*”- en los cuales por el auto impugnado, se cumple con los requisitos de motivación que se prescriben por la ley procesal vigente (confr. Regs. Nos. 923/03, 602/15, 72/16 y CPE 480/2018/3/CA1, res. del 29/06/21, Reg. Interno N° 429/21, entre muchos otros, de esta Sala “B”).

En consecuencia, el agravio vinculado con la arbitrariedad y la falta de una motivación adecuada de la resolución recurrida, expresado por la defensa oficial de los imputados, no puede tener una recepción favorable.

9º) Que, ingresando a la cuestión de fondo traída a estudio en el marco del presente incidente, cabe tener presente las siguientes circunstancias que fueron valoradas por la resolución recurrida:



a) U. F. S. se encontró inscripto en A.F.I.P. desde el 26/04/2012, declaró como actividad la “elaboración de productos de panadería N.C.P.” y “servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o mostrador N.C.P.”, declaró como domicilio fiscal aquél sito en Av. San Juan N° 2102 de esta ciudad, y como “locales y establecimientos” aquellos ubicados en Av. Directorio N° 3999 y en Adolfo Alsina N° 1501, ambos de esta ciudad, y se encontró inscripto en el Impuesto a las Ganancias, en el Impuesto al Valor Agregado y en Aportes de Seguridad Social (confr. impresiones de padrones de A.F.I.P. e informes resguardados por secretaría en los sobres identificados con los nros. 1, 2 y 3).

b) con fecha **16/06/2016** el apoderado de la Obra Social del Personal de Panaderías promovió ejecución fiscal contra U. F. S., con domicilio en Av. San Juan N° 2102 de esta ciudad, por la suma de \$ 287.600,53 con más los intereses resarcitorios y/o punitivos que resulten aplicables, correspondiente a la deuda de aportes y contribuciones de la Seguridad Social, por varios períodos mensuales comprendidos entre noviembre/2008 y febrero/2016, la cual no habría sido impugnada oportunamente por el nombrado (confr. fs. 78/93 de los autos principales).

c) el **24/08/2016** se notificó a la “*encargada del local*” ubicado en el domicilio de Av. San Juan N° 2102, el mandamiento de intimación de pago y citación a remate dispuesto por el juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Seguridad Social N° 2, y no habiéndose opuesto excepciones, con fecha **5/10/2016** se dictó la sentencia llevando adelante la ejecución promovida por la Obra Social del Personal de Panaderías hasta hacerse íntegro el pago de la suma de \$ 287.600,53 con más el 30 % de ese monto para responder a intereses, costos y costas, la cual fue notificada en el domicilio de mención a “*la empleada de allí (café)*” con fecha **11/10/2016** (confr. fs. 97/101 de los autos principales).

d) con fecha **31/10/2016** se registró en las bases de datos de A.F.I.P. la baja de U. F. S. como empleador, en Aportes de Seguridad Social (confr. fs. 168/197 de los autos principales e informe resguardado en el sobre N° 2 reservado por la secretaría).

e) el **17/04/2017** R. R. B. se inscribió ante la A.F.I.P., declaró como actividad la “elaboración de productos de panadería N.C.P.” y “servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o mostrador N.C.P.”, se inscribió en el Impuesto a las Ganancias, en el Impuesto



al Valor Agregado y en Aportes de la Seguridad Social y declaró como “locales y establecimientos” los domicilios de Av. San Juan 2102, Av. Directorio 3999 y Adolfo Alsina 1501, todos de esta ciudad (confr. fs. 208/215 de los autos principales y padrón reservado en sobre N° 1).

f) el **23/05/2017**, a pedido de la parte actora, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Seguridad Social N° 2 decretó el embargo sobre los ingresos brutos que percibiera U. F. S. hasta cubrir la suma reclamada y el porcentaje fijado para responder a intereses, costos y costas, y designó como interventor recaudador y oficial de justicia ad-hoc a A. A. para que proceda a retener el 20 % diario de aquellos ingresos hasta alcanzar el monto fijado por la sentencia de ejecución (confr. fs. 115/117 de los autos principales).

g) en cumplimiento de lo encomendado, A. A. informó al tribunal que se constituyó en el domicilio de Av. San Juan 2102 de esta ciudad a los efectos de diligenciar el mandamiento de posesión librado con fecha **9/06/2017**, donde constató que funciona una cafetería con despacho, siendo atendido por “...quien dijo ser el Sr. **R. R. B.**, quien manifestó ser titular del **DNI 26.127.200**, sin habérmelo exhibido, ser el titular de la actividad y que el **Sr. F. S. U. había dejado de ser el propietario del comercio...**” y que “...en ese momento no tenía en su poder documentación alguna que acredite su titularidad y que se comunicaría con su contador para hacerme llegar dichas constancias...”. Asimismo, A. dejó constancia que se constituyó en el domicilio indicado en otra oportunidad y que al “...requerir la presencia del Titular, me indican que el Sr. B. (sic) no se encontraba en ese momento y que se comunicaría conmigo para hacerme llegar la documentación requerida...”, que habiéndose incumplido lo anterior concurrió nuevamente al local de mención, siendo atendido por quien se identificó como A. P., quien “...al requerirle la presencia del propietario, encargado o quien se halle a cargo, manifiesta que el titular de la actividad es el **Sr. F. S. U.**, que en ese momento no se encontraba en el lugar... se comunica con él telefónicamente informándole de mi presencia y me manifiesta que el Sr. F. dice no poder atenderme...”, ocasión en la que la nombrada habría hecho entrega de las constancias de titularidad de F. S. del establecimiento en cuestión y del controlador fiscal habilitado para el mismo. A. informó que se le brindó el abonado telefónico de F. S., con quien no pudo comunicarse pese a los reiterados llamados efectuados. En función de ello, el interventor recaudador refirió al juzgado actuante que “...en virtud de las claras



maniobras de obstrucción a la tarea de este auxiliar solicito se ordene el libramiento de un Mandamiento de Posesión ampliatorio en el que se otorguen al suscripto facultades para requerir el auxilio de la Fuerza Pública todo ello de ser estrictamente necesario y a efectos de cumplir cabalmente con la tarea asignada...” (confr. fs. 118/125 de los autos principales; lo destacado y subrayado pertenecen al texto original).

h) el 7/07/2017 R. R. B. radicó una denuncia ante la Comisaría 6ta. de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, contra M. D. F. (quien sería el hijo de U. F. S.), por el delito de administración fraudulenta, explicando que en el mes de abril de 2017 concurrió, junto con el denunciado, a una dependencia de la A.F.I.P. a los fines de realizar los trámites correspondientes para la regularización de su contratación como empleado de aquél, según le fue explicado por M. D. F., que “...*ignora si firm[ó] documentación en oportunidad de realizar estos trámites ni recuerda tampoco que lo hubiere hecho el Sr F. indicando que ese día tenía mucho sueño y no dio mayor importancia a las cuestiones inherentes a ese tr[á]mite...*” y que dos o tres meses antes de la interposición de la denuncia “...*comenzó a percibir que llegaban al local donde trabajaba hasta hace algunos días sito en Alsina y L S Peña (sic), docu[me]ntación relaciona[da] al establecimiento en la cual figuraba el denunciante como titular registral del emprendimiento y/o establecimiento, no solo el de la calle Alsina 1501 sino que también revestía similar car[á]cter en los otros dos locales propiedad de Sr. F. que antes indic[ó]...*”, aportando en sustento de ello las constancias que en copia obran a fs. 7 y 10 de los autos principales, correspondientes a cuatro tickets fiscales de los domicilios de Av. San Juan 2102 y Adolfo Alsina 1501 de esta ciudad y a dos actas de intimación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dirigidos a tales domicilios en los que se lee el nombre de R. R. B. como titular. Por otra parte, el denunciante expresó que “...*hace aproximadamente un mes y medio...*” se presentó A. A. en el local de Alsina 1501, quien manifestó ser interventor y trabajar en el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 2, a los fines de intimarlo para que regularice la condición laboral de los empleados de ese local “...*y de los otros dos restantes...*”, a lo cual B. “...*mencionó que no era el dueño pero como toda respuesta [que] se le pregunto por parte de este funcionario (sic) si el deponente era Borjas Rodrigo y al ser ello afirmado, le indic[ó] que con [é]l era con quien debía hablar...*”, aclarando que “...no sabe



c[ó]mo es que termina el deponente como responsable de los establecimientos antes indicados, hecho éste que le fue ratificado en la fecha al concurrir solo, a la sucursal de AFIP antes indicada lugar donde se le informa que para cesar la actividad debe dar de baja IVA, impuestos, monotributo en el que halla inscripto etc., todo lo cual desconoce haber generado...” (confr. fs. 1/2 de los autos principales).

i) el **10/07/2017** los funcionarios policiales actuantes dejaron constancia que procedieron a entablar comunicación telefónica con M. D. F. al abonado telefónico brindado por R. R. B. al radicar la denuncia aludida por el apartado anterior, para que tome conocimiento de la misma, sin obtener respuesta alguna, por lo que dejaron un correo de voz (confr. fs. 13 de los autos principales).

j) el **11/07/2017** J. H. F. A. se inscribió ante la A.F.I.P., declaró las mismas actividades que U. F. S. y R. R. B., se inscribió en los mismos impuestos que los nombrados y declaró como “locales y establecimientos” los domicilios de Av. San Juan 2102, Av. Directorio 3999 y Adolfo Alsina 1501, todos de esta ciudad (confr. fs. padrón reservado en sobre N° 1).

k) el **31/07/2017** U. F. S. se dio de baja en forma definitiva del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto al Valor Agregado y de Autónomos, bajo el motivo “*cese de actividades*” (confr. informe resguardado en sobre N° 2 reservado por la secretaría).

l) en virtud de lo solicitado por el interventor A., el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 2 dispuso librar nuevo mandamiento de posesión en los mismos términos que aquél dispuesto anteriormente, autorizándose a requerir la fuerza pública en caso de resultar necesario, conforme fue solicitado por el nombrado, reseñado por el apartado g) del presente considerando (confr. fs. 119 y 126/130 de los autos principales).

Por el escrito presentado con fecha **14/12/2017**, A. A. informó que concurrió al domicilio de Av. San Juan 2102 de esta ciudad a fin de diligenciar el mandamiento aludido, siendo atendido por quien dijo llamarse N. D. F., quien manifestó ser el encargado del lugar y que “...el Sr. F. S. U. había dejado de ser el propietario del comercio...”, aportando en sustento de ello las copias que obran agregadas a fs. 139/140 de los autos principales, que se corresponden con las constancias de titularidad de la explotación del local de Av. San Juan 2102, emitidas a nombre J. H. F. A. y del controlador fiscal habilitado para ese

domicilio, también a nombre de éste último, con fecha de inicialización del mismo el 25/07/2017 (confr. fs. 141 de los autos principales; lo destacado y subrayado es del texto original).

Posteriormente, con fecha **23/02/2018**, el interventor se constituyó nuevamente en el domicilio aludido siendo atendido por el nombrado F., a quien se le consultó sobre la presencia de U. F. S., manifestando en esta oportunidad que “...**no lo conoce y que el titular de la actividad es el Sr. F. A. J. H....**”, aportando en sustento de ello una copia de un ticket emitido ese mismo día en el que figura como titular del establecimiento de Av. San Juan 2102 el nombrado F. A., así como también en la constancia de A.F.I.P. emitida con información del titular del negocio (confr. fs. 145/146 de los autos principales; el destacado es de la presente).

10°) Que, con respecto a los agravios relacionados con la falta de acreditación de la participación culpable de R. R. B. y de J. H. F. A. en el suceso investigado en autos, se aprecia que las invocaciones de la defensa oficial de los nombrados sólo constituyen una discrepancia de aquella parte con la valoración efectuada por el tribunal de la instancia anterior de los elementos de prueba incorporados al legajo principal, los cuales resultan suficientes, al menos para este momento del proceso, para formar el convencimiento del juzgador con respecto a la probabilidad establecida por el art. 306 del C.P.P.N., sobre la intervención penalmente relevante que los nombrados habrían tenido en el hecho “*prima facie*” ilícito investigado.

11°) Que, por la valoración de la secuencia reseñada por el considerando **9°** de la presente, lo expresado por R. R. B. en su descargo, reproducido por el recurso de apelación presentado por la defensa oficial del nombrado, no resulta verosímil ni se ajusta a las circunstancias acreditadas en la causa.

En efecto, la propia manifestación del nombrado ante el interventor recaudador A., quien se encontraba diligenciando un mandamiento de embargo y posesión a ejecutarse “...*en el domicilio de la demandada (sic) F. S. U. (CUIT 2.) sito en la Av. San Juan 2102 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...*”, en cuanto refirió “...*ser el propietario de la actividad y que el Sr. F. S. U. había dejado de ser el propietario del comercio...*”, luego de haberse inscripto ante la



A.F.I.P., con posterioridad a que se notificara la sentencia de ejecución de la deuda reclamada por la Obra Social del Personal de Panaderías, declarando la misma actividad que U. F. S. y como titular de los locales comerciales que explotaba el nombrado, controvierte seriamente lo expresado por el imputado al momento de interponer la denuncia que dio origen a la presente causa y de prestar la declaración indagatoria en autos, y permite estimar acreditado, con el alcance requerido para esta etapa del proceso penal, el conocimiento que habría tenido R. R. B. sobre la existencia del proceso judicial de cobro de la deuda por aportes y contribuciones de la Seguridad Social seguido contra U. F. S. y del alcance y la finalidad de los actos realizados por aquél a los efectos de provocar o agravar la insolvencia de U. F. S. y frustrar el cobro de aquellas obligaciones.

Al respecto, con relación a la situación descripta por R. R. B. en la que refiere haber tomado conocimiento por intermedio del interventor A. *“...que figuraba como responsable de la panadería...”*, corresponde señalar que por la denuncia de fs. 1/2 vta. de los autos principales el nombrado expresó que ello sucedió en la ocasión en que el interventor aludido *“...se present[ó] en el local de Alsina 1501, ello en oportunidad de hallarse el narrante en el mismo, quien se identific[ó] como A. A... que refirió ser interventor... y que allí se presentaba a fin de intimar al narrante que regularice la condición laboral de los empleados tanto de ese establecimiento como de los otros dos restantes...”*, mientras que por el escrito de descargo presentado en la ocasión de prestar la declaración indagatoria en autos, expresó que todo ello había sucedido en otro domicilio, en el local Av. San Juan 2102 de esta ciudad, circunstancia que permite descartar la veracidad del relato, teniendo en consideración además que la finalidad pretendida por el diligenciamiento del mandamiento de embargo y de posesión era la retención de una parte de la recaudación del local a los fines del cobro de la deuda reclamada cuya ejecución fue ordenada judicialmente, y no la regularización de la condición laboral de los empleados del establecimiento como lo alegó el imputado en la denuncia aludida anteriormente.

Por otro lado, el hecho de que R. R. B. haya manifestado que U. F. S. había dejado de ser el propietario del comercio del local en que se diligenció el mandamiento en cuestión, evidencia el conocimiento de aquél de la existencia de éste último y de su vinculación con la explotación del negocio, por lo que tampoco resulta creíble lo expresado por el imputado en cuanto refirió que “...



jamás tuve ningún tipo de contacto comercial con el señor U. F. S....”, resultando inverosímil la versión exculpatoria que B. brindó al prestar la declaración indagatoria, máxime si se tiene en consideración que por la denuncia de autos el nombrado refirió que ignoraba haber firmado algún documento en la oportunidad en la que concurrió con M. D. F. a la dependencia de A.F.I.P. “... porque ese día tenía mucho sueño y no le dio mayor importancia a las cuestiones inherentes a ese trámite...”, siendo que el formulario de inscripción ante el organismo fiscal (con sello de recepción el día 17/04/2017) y las constancias aportadas en aquella ocasión se encuentran suscriptos por el nombrado (con firma y aclaración), observándose además que con fecha 24/04/2017 R. R. B. registró digitalmente en las bases de datos de A.F.I.P. su foto, su firma y su huella dactilar declarando asimismo como “locales y establecimientos” los domicilios de Av. San Juan 2102, Adolfo Alsina 1501 y Av. Directorio 3999, todos esta ciudad, por lo que lo alegado por el nombrado en cuanto a que habrían utilizado sus datos sin su consentimiento no encuentra otro sustento que los dichos del nombrado, resultando desvirtuado por los elementos probatorios incorporados durante la pesquisa, por lo que el argumento de defensa aludido tampoco puede tener una recepción favorable.

12º) Que, por otra parte, lo expresado por J. H. F. A. en su descargo tampoco resulta verosímil y lo manifestado por la defensa oficial del nombrado por el recurso de apelación examinado no logra controvertir la conclusión expresada por el juzgado de la instancia anterior respecto de la acreditación, con el alcance requerido para esta etapa del proceso, de la intervención que aquél habría tenido en el hecho ilícito investigado.

En efecto, no resulta atendible el desconocimiento alegado por J. H. F. A. respecto del contenido de los papeles que habría firmado a pedido de U. S. F., quien, según explicó, le habría manifestado que eran necesarios para ser presentados en oficinas públicas a los fines de regularizar su situación laboral, si se tienen en consideración el grado de instrucción del imputado (quien manifestó haber culminado los estudios secundarios en Perú) y las reglas de la experiencia y del sentido común que permiten descartar, en el caso, que el nombrado haya suscripto papeles sin haber leído ni conocido el contenido de los mismos, o que alguien haya abusado de su confianza en la ocasión.



Máxime, si se observa que el hecho de haber firmado aquellos papeles no habría sido el único comportamiento de J. H. F. A. relacionado con la maniobra investigada, toda vez que de las impresiones de las bases de datos de la A.F.I.P. reservadas por la secretaría, surge que con fecha 14/07/2017, es decir tres días después de haberse inscripto como contribuyente y titular de la explotación de los locales de Av. San Juan 2102, Av. Directorio 3999 y Adolfo Alsina 1501, el nombrado registró digitalmente ante el organismo fiscal su firma, su foto y su huella dactilar, circunstancia respecto de la cual F. A. no brindó explicación alguna, por lo cual también en este caso el argumento de defensa invocado debe ser descartado.

Asimismo, se encontraría acreditado que, al menos hasta febrero de 2018, el local de Avenida San Juan 2102 de esta ciudad permaneció registrado bajo la titularidad de J. H. F. A. (período durante el cual el nombrado habría continuado prestando funciones para U. F. S., en su descargo precisó que trabajó como empleado del nombrado de 2016 a 2019), tal como surge de los tickets emitidos por el controlador fiscal registrado en ese establecimiento de los que puede leerse “F. A. J. H. C.U.I.T.: 2., AV. SAN JUAN 2102 C.A.B.A...”, los cuales fueron aportados por el empleado del local aludido, N. F., en ocasión de diligenciarse los mandamientos de embargo y de posesión, quien además refirió expresamente que el titular del mismo era F. A. (confr. apartado I) del considerando 9º de la presente), circunstancia que analizada de manera conjunta e integral con lo expresado por los párrafos anteriores, permite estimar que el nombrado habría estado en conocimiento de su inscripción como titular de los establecimientos cuya explotación se habría encontrado a cargo de U. F. S. y de la finalidad de los actos realizados para provocar o agravar la insolvencia de aquél y frustrar el cobro de las obligaciones previsionales reclamadas.

13º) Que, por consiguiente, los fundamentos expresados por la resolución en examen, a partir de los cuales el juzgado “a quo” estableció provisionalmente la materialidad del hecho investigado en la causa principal y la intervención culpable que R. R. B. y J. H. F. A. habrían tenido en la comisión de aquél, resultan sustentables y se adecuan, en principio, a las constancias incorporadas hasta el momento a la causa principal, valoradas en forma conjunta y de conformidad con las reglas de la sana crítica, los cuales no fueron rebatidos suficientemente por la defensa oficial de los nombrado.



En el caso, los cuestionamientos efectuados por la defensa de aquéllos sobre la entidad convictiva de los elementos de prueba incorporados a la causa principal parten de un análisis aislado de cada elemento, sin apreciar a aquéllos en conjunto. Este análisis parcial no puede tener una recepción favorable, pues la eficacia de las presunciones que podrían derivar de cada elemento de prueba depende de la valoración conjunta que se efectúe de aquéllos teniendo en cuenta la diversidad, la correlación y la concordancia de los mismos, pero no de un tratamiento particular y aislado pues, por su misma naturaleza, cada uno de los indicios no puede llegar a fundar aisladamente ningún juicio de convicción, el cual deriva de la pluralidad y concordancia de aquéllos (confr. Fallos 300:928).

Como ha establecido esta Sala “B”, “...la totalidad de los elementos probatorios arrimados al expediente debe ser objeto de una valoración articulada, contextual y conjunta dentro del plexo probatorio, el cual, evaluado en un acto único y con ajuste a la sana crítica racional, posibilita la obtención de una acabada constatación de los hechos investigados. El mero análisis parcializado de los elementos de prueba incorporados al proceso impide la comprensión global del hecho de que se trata...” (confr. CPE 431/2020/13/CA8, res. del 2/03/2022, Reg. Int. 69/2022 y CPE 433/2020/14/CA8, res. del 31/03/2022, Reg. Int. 118/2022, entre muchos otros, de esta Sala “B”).

14º) Que, por la necesidad eventual de producir alguna medida de prueba, y por los resultados que aquélla pudiera traer aparejada en el futuro, no pueden soslayarse las conclusiones expresadas por la resolución recurrida y por los considerandos anteriores -que se basan en las constancias que actualmente se encuentran incorporadas a la encuesta-, ni se impide adoptar el temperamento que se establece por el art. 306 del ordenamiento adjetivo, pues por aquel ordenamiento se prevé el carácter provisorio, revocable y reformable del auto de procesamiento (art. 311 del C.P.P.N.), precisamente para que el juez pueda meritar aquellas circunstancias futuras en el supuesto en que se produjesen (confr. Regs. Nos. 1036/05, 132/08, 7/11, 379/11, 703/11, 762/11 y 161/12, CPE 1548/2017/7/CA1, res. del 9/05/2019, Reg. Interno N° 313/19, CPE 695/2016/6/CA3, res. del 11/02/2022, Reg. Interno N° 31/22, entre otros, de esta Sala “B”).



15°) Que, en este sentido, este Tribunal ha establecido: “...para el dictado del auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al menos, se permita corroborar la existencia de un estado de probabilidad con respecto a la comisión del delito investigado, y a la participación culpable de los indagados por aquel hecho...” (confr. Reg. N° 606/10 y CPE 695/2016/6/CA3, res. del 11/02/2022, Reg. Interno N° 31/22 y CPE 1351/2019/2/CA1, res. del 19/04/2022, Reg. Interno N° 155/22 de esta Sala “B”, entre muchos otros).

16°) Que, consecuentemente, corresponde concluir que el auto de procesamiento dictado respecto de R. R. B. y de J. H. F. A. resulta ajustado a derecho y a las constancias incorporadas actualmente al expediente principal, por lo que debe ser confirmado.

17°) Que, en atención a que por los recursos de apelación interpuestos la defensa oficial de R. R. B. y de J. H. F. A. no se introdujo un agravio autónomo con relación a la decisión del señor juez de la instancia anterior de disponer un embargo sobre los bienes de los nombrados, corresponde declarar mal concedidos los recursos de apelación deducidos contra los puntos dispositivos II y IV de la resolución recurrida, respectivamente (confr. arts. 444, 445 y 450 del C.P.P.N.).

Por lo expresado, **SE RESUELVE:**

I. DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDOS los recursos de apelación interpuestos por la defensa oficial de R. R. B. y de J. H. F. A. contra los puntos dispositivos II y IV de la resolución recurrida, respectivamente, en cuanto por aquéllos se dispuso trabar un embargo sobre los bienes de los nombrados.

II. CONFIRMAR el auto de procesamiento de R. R. B. y de J. H. F. A. dispuesto por los puntos dispositivos I y III de la resolución recurrida. **CON COSTAS** (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia



de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, y devuélvase
junto con los autos principales y la documentación reservada por la secretaría.

Firman sólo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía
restante de esta Sala.

